

El Interés Patrimonial en las obligaciones *

por ARTURO BARCIA LÓPEZ

Fuera de la existencia, posibilidad, determinación y licitud del *objeto* de las obligaciones, hay otro *requisito*, también *esencial*, constituido por el *interés del acreedor en la prestación*. Es indispensable que la prestación, objeto de la obligación, beneficie de alguna manera al acreedor, sujeto activo del crédito, ya que no se justifica una carga sobre el patrimonio del deudor o una restricción arbitraria de su libertad por un mero capricho, sin que derive de ella una ventaja, una utilidad, un provecho serio y legítimo para el acreedor o para un tercero beneficiario. Trataremos, entonces, de determinar cuál es el carácter de esa *utilidad* que la prestación debe tener, punto muy controvertido en la doctrina moderna y aún dentro de nuestro propio derecho positivo.

La idea del *interés*, como *fin* de la protección jurídica, domina en todas las instituciones civiles, desde el viejo derecho romano, donde al tratarse de las acciones, surge a cada paso la consideración de la *utilitas*, del *interest*. Y lo propio ocurre en la época actual. Pero la dificultad principal en materia de obligaciones, es caracterizar la naturaleza de ese interés privado del acreedor, esto es, saber si ha de tratarse exclusivamente de un interés *económico* o *pecuniario*, o si, en cambio, puede tratarse de un interés de cualquier otro orden, aún *extrapatrimonial*, con tal que sea *serio* y *legítimo*.

Además, hay otra cuestión que se relaciona con la anterior, pero que es independiente de ella, y es la de determinar si el *objeto mismo* de la obligación, o sea la *prestación*, debe tener en sí un valor económico, pecuniario, *patrimonial* susceptible, por tanto, de valuación en dinero.

* Resumen de las lecciones del autor en sus cátedras de las Universidades Nacionales de La Plata y Buenos Aires (1921-1956) y Católicas del Salvador y de Mar del Plata (1958-1963) sobre este tema.

Las dos nociones señaladas son diferentes y conviene separarlas netamente desde el primer momento, por cuanto a menudo los autores confunden ambas ideas, y hablan del *objeto pecuniario* de la obligación, tomando la palabra "*objeto*" en la acepción de "*fin*". El *fin* o *interés* protegido *mediante* la obligación no es el *objeto* de la obligación o del derecho de crédito, ya que éste último es la *prestación* misma. El objeto de la obligación, a su vez, puede ser el objeto *indirecto* de un *contrato*, en cuanto el contrato crea obligaciones y éstas tienen un *objeto* sobre el cual recaen, que es la *prestación* de dar, hacer o no hacer (arts. 495 y 1168, Cód. civ.).

Pues bien; el *objeto* mismo de la obligación así entendido, ¿debe tener un valor *económico* susceptible de apreciación en dinero o, por el contrario, puede ser ese contenido extraño a toda idea patrimonial? He ahí un primer problema.

Otra cuestión muy distinta de la anterior es, en cambio, la de determinar si el *fin* que mediante el derecho a la prestación se tiende a satisfacer, proteger o amparar, esto es la utilidad, el beneficio directo o indirecto del acreedor, debe ser también de orden pecuniario o puede no serlo.

Las dos cuestiones planteadas, como se ve, son absolutamente diversas, pero a menudo autores nacionales y extranjeros muy eminentes las confunden, aplicando a una de ellas conclusiones que corresponden a la otra.

A este respecto, ya entre los modernos intérpretes del derecho romano, a partir de Windscheid, se suscitó una viva controversia, a la que Ihering alude en su brillante estudio sobre "*El interés en los contratos*", donde plantea su fundamental disidencia frente a Savigny y sus secuaces de la escuela histórica, quienes sostenían la tesis del necesario valor patrimonial de la prestación, objeto de las obligaciones, apoyándose en el Digesto y en las Institutas de Gayo, especialmente en la referencia de éste al principio romano según el cual el juez debía fijar su condena en una suma de dinero.

Hay que advertir, sin embargo, que precisamente en esta polémica se confunde más de una vez el *interés* protegido mediante el derecho a la prestación, con la prestación misma, *objeto* de la obligación, cuando en realidad son dos conceptos diferentes. Puede ocurrir —y a menudo sucede así— que la prestación tenga en sí misma un valor económico o pecuniario, que se retribuya mediante una suma de dinero, y que, sin embargo, el interés que se satisfaga con ella no sea de igual naturaleza, sino puramente moral, religioso, espiritual, afectivo, científico, literario, estético o meramente recreativo.

Si analizamos los antecedentes y el desenvolvimiento que han tenido estas ideas nos encontramos con que aún antes de los romanistas modernos, ya Pothier, en el párrafo 138 del tomo I de su "*Tratado de las obligaciones*", decía que no sólo la *prestación*, objeto de la obligación, debe tener un valor pecuniario, sino que, además, en el *acreedor* debe existir un *interés apreciable en dinero*. El acreedor mismo debe tener en el cumplimiento de la obligación un *interés pecuniario* según Pothier, influenciado, sin duda, por

ciertos pasajes del Digesto, aun antes del descubrimiento por Niebuhr de las *Institutas* de Gayo, en la Biblioteca Capitulare de Verona (1816).

Con ese antecedente del antiguo derecho francés, no es extraño, entonces, que los comentadores del Código Napoleón, y en particular Aubry y Rau, sostengan, fundándose en el célebre texto romano, que cita el codificador en la nota al artículo 1169, estos dos principios: *primero*, que el *objeto* de la obligación, o sea la *prestación*, tiene que tener valor económico o pecuniario, esto es, apreciable en dinero (Aubry y Rau, parágrafo 344, tomo IV); *segundo*, que el *beneficio* o provecho del acreedor también debe ser pecuniario o económico; esto es, que debe haber un *interés* serio y legítimo del acreedor, y que éste debe ser siempre económico o pecuniario, vale decir, de índole *patrimonial* (Aubry y Rau, parágrafo 344 in fine, tomo IV).

Se trata, como se ve, de dos exigencias o requisitos muy diferentes. Una de ellas, la primera, está expresamente aceptada por el Código argentino en el texto del artículo 1169, cuando dice: “*la prestación objeto de un contrato puede consistir en la entrega de una cosa...*” La *cosa* es siempre, por definición —según el artículo 2311 y su nota—, un objeto susceptible de valor pecuniario; su entrega debe tener también igual valor. Pero si se tratara de un *hecho*, podría éste no tener valor pecuniario. Por eso agrega el artículo 1169: “*...o en el cumplimiento de un hecho positivo o negativo susceptible de una apreciación pecuniaria*”. El Código exige, pues, que la *acción* o la *abstención* que se preste sea susceptible de ser valuada en dinero. Pero nada más que eso.

La nota, en cambio, cita a Aubry y Rau, quienes en el § 344 (t. IV) se refieren a los dos requisitos premencionados, a esa doble exigencia, de la cual el Código en su articulado sólo impuso la primera y no la segunda. Como observa Bibiloni, la primera parte del parágrafo 344 es el texto del artículo, y la otra parte, que exige un interés pecuniario del acreedor, está enunciada unas páginas más adelante; es una nueva exigencia y no la explicación de la primera. Por tanto, esa segunda parte no tiene nada que ver con la primera, puesto que agrega una nueva condición: el *fin* o el *interés pecuniario*, que se requiere en la persona del *acreedor*, conforme a la tradición romanista y al concepto de Pothier. Esta nueva exigencia no es impuesta por el texto legal del art. 1169, careciendo de valor los agregados de su nota.

Dicha nota recuerda aquella célebre Ley romana del Digesto: “*ea enim in obligatione consistere quae pecunia tui prestari quae possunt*”, viejo principio al que se refirió ya Gayo indirectamente. Ese principio se fundaba en que, dentro de la organización romana, la *condemnatio* tenía que traducirse en materia de obligaciones en una cantidad de dinero. De allí extrajo Ihering la idea de la triple función del dinero: 1º) su función *penal* y *conminatoria*; 2º) su función de *equivalencia* o resarcimiento; y 3º) su función de *pura satisfacción*. Esta concepción sobre las diversas funciones

del dinero deriva de la amplitud que en el derecho romano tenía la *condemnatio*, que servía para *conminar* al deudor, en cierto modo como en las modernas *astreintes*, con la sanción de una *multa* compulsiva o castigarlo y reprimir la violación con una *pena pecuniaria*; para reparar un daño cuando era posible la *equivalencia* con el detrimento sufrido o el beneficio no percibido (*damnum emergens, lucrum cessans*); o bien cuando no había equivalencia posible, a fin de dar una *satisfacción* a la víctima del *daño moral* (*pretium doloris*).

En el último caso, según Ihering, el dinero no es un equivalente del valor, o sea del monto a que asciende el daño, ni tiene, por tanto, una función de *equivalencia* o reparación directa del perjuicio, que está colocado en un plano muy distinto. No es posible que mediante una suma de dinero se repare el dolor, el sufrimiento, la angustia, la zozobra, originados por un acto ilícito. Esos estados psíquicos, esos males, no tienen un valor patrimonial, y los bienes que pueden compensarlos no pueden ser económicos o pecuniarios. Esos *detrimentos* son de orden *moral* y no *patrimonial*. ¿Cómo es posible, entonces, que con un *bien patrimonial* —como es el dinero— se repare un *detrimento moral*? Se trata de planos muy diversos. Pero ocurre que hay la posibilidad de pasar de un plano al otro, pues con el dinero se pueden obtener beneficios o provechos de orden moral que compensen *detrimentos* del mismo orden. Mediante ese elemento patrimonial se puede procurar la víctima goces morales o espirituales que le compensen o reparen aquellos *detrimentos* morales. De esta manera indirecta puede lograrse la indemnización adecuada del daño moral. La cantidad de dinero que el autor de un agravio moral debe entregar será aquella que sea suficiente para obtener una ventaja del mismo orden, que compense el daño moral sufrido.

Con estas ideas explica Ihering el concepto romano de la *condemnatio*, que debía ser siempre pecuniaria, y fue utilizada con los más variados fines y en las más diversas cuestiones, por esas distintas funciones que el dinero puede tener.

Hemos visto ya la función que el dinero desempeña, cuando con el mismo se *compensa* el *incumplimiento* de una *obligación*. Si el deudor deja de cumplir con su prestación, debe reparar el perjuicio causado al acreedor con una suma de dinero. El *objeto* de la obligación —la *prestación*— no se ha cumplido, y en consecuencia hay que *compensar* esa omisión con su *equivalente* en dinero. Para ello es necesario, entonces, que el *objeto* de la relación jurídica sea *susceptible de apreciación pecuniaria*, de valor monetario, a fin de que el *dinero* reemplace a la *prestación* también del mismo valor.

Ihering, sin embargo, al destacar esas varias funciones del dinero, procura desvirtuar el argumento de quienes fundan en el derecho romano la idea de que la *prestación* debe tener un valor *pecuniario*. Para ello estudia gran número de pasajes del Digesto y pone distintos ejemplos de los cuales

se desprende que el *interés del acreedor* o el interés del que acciona puede no ser pecuniario, sino puramente moral, espiritual, científico, artístico o estético, extraño completamente al orden económico. Y no sólo puede tratarse del interés directo del acreedor, sino también de un interés indirecto, como ocurría en el derecho romano, por ejemplo, con la acción derivada de la corrupción del esclavo. Mientras estaba en manos del dueño —como el esclavo era considerado una *cosa*, objeto del derecho de propiedad—, había un daño pecuniario y económico, porque el esclavo prestaba un servicio, y si se lo corrompía, el servicio no podía ser prestado con la misma eficiencia. Había, entonces, un interés económico cuando se trataba de ejercer la acción contra terceros por la corrupción de un esclavo que estaba en poder de su dueño. En cambio, si se vendía un esclavo con la condición de que no se lo corrompiera, o una esclava con la condición de que no se la prostituyera, el vendedor no tenía ya un interés económico, sino puramente afectivo. Así como este caso, hay muchos otros en que *no es necesario que el interés del acreedor sea económico, ni pecuniario. Pero la prestación objeto de las relaciones obligacionales es siempre pecuniaria*, como surge de esos mismos textos comentados por Ihering.

En el caso del amo que vendía su esclava con la condición de que no se la prostituyera, había un interés indirecto y puramente moral. Pero para satisfacer ese interés moral ha debido cobrarse menos dinero, ya que la venta de un esclavo, sujeta a restricción o cargo, tiene un precio inferior. Al ponerse limitaciones al comprador en la cosa que adquiere, dichas limitaciones disminuyen naturalmente el valor económico de la misma. Por esas restricciones impuestas al comprador de la cosa se ha *pagado* algo, pues ellas han entrado en consideración para la determinación del *precio de venta*. Por más que el interés del vendedor sea de carácter puramente moral, ha habido un sacrificio o disminución de su patrimonio, pues ha cobrado un precio menor por el esclavo. Entonces ese derecho y esa obligación tienen *un valor pecuniario en sí mismos*, aunque sean estipulados para satisfacer un *interés del acreedor* que no es económico, sino puramente afectivo o moral.

Así se podrían analizar cada uno de los distintos casos de derechos propiamente creditorios citados por Ihering. En todos ellos siempre se vería que las *prestaciones*, objeto de la *obligación*, tienen *todas* un valor susceptible de *apreciación pecuniaria*, aunque el *fin* para el cual se acuerdan esos derechos o se establecen esas obligaciones, o sea los *intereses* que se protegen *mediante* ellas no tengan un valor económico, sino puramente moral.

Es que Ihering, al negar el requisito del valor pecuniario de toda prestación, incurre en una confusión entre el derecho de crédito y su finalidad; y podemos explicarnos esa confusión porque ella proviene de su error fundamental sobre la *naturaleza* misma del *derecho subjetivo*. Al estudiar, en

¹ Pueden verse los fundamentos de ambos sistemas en el libro del autor: "*Las Personas Jurídicas*" (2a. Edic., 1922, p. 132 y sigs.).

el Curso general de Derecho Civil, el concepto del derecho subjetivo, en las diversas doctrinas sobre la *naturaleza* de las *personas jurídicas*, se ha visto que hay al respecto dos grandes teorías¹. Para Savigny, el derecho, desde el punto de vista subjetivo, es un *poder de obrar*, un poder atribuido a la *voluntad*; y faltando ésta en las personas jurídicas, no pueden ser ellas sino “ficciones”. Ihering critica la tesis de Savigny alegando que si el derecho fuese un poder de obrar o de la voluntad, un demente o un menor impúber, desprovistos de voluntad, no podrían ser titulares de derechos: acreedores, propietarios o deudores. La *voluntad* —dice con razón— interviene como elemento necesario para el *ejercicio* del derecho, pero no constituye su *fin*, ni su *esencia*, por lo que no es exacto que el derecho sea un poder de la voluntad, ni sea necesario ese requisito en su titular. Es correcta esa crítica de Ihering a la doctrina de Savigny, pero no lo es el concepto mediante el cual reemplaza el criterio anterior. Ihering dice que los *derechos subjetivos*, en sí mismos, son *intereses jurídicamente protegidos*, que el interés se *identifica* con el derecho subjetivo y constituye su *esencia*; y esto no es verdad. El derecho subjetivo es una *potestad ideal*, emergente de la norma objetiva, que se da *para* el amparo, la protección y la defensa de intereses humano-sociales; pero esos intereses, en sí mismos, *no son derechos*. La salud, la vida, el placer, el goce, las satisfacciones materiales, espirituales o místicas, son bienes o valores, no son derechos. Pero se acuerdan *derechos* y se crean *obligaciones*, se establecen *poderes jurídicos* en favor de unos y *deberes jurídicos* a cargo de otros, *para* amparar, proteger y defender esos valores, bienes o intereses. Éstos constituyen, así, el “*fin*” de la protección coercitiva, realizada por el ordenamiento jurídico, *mediante* aquellos *poderes subjetivos*, que no exigen en su titular ni la voluntad, ni el interés. Se trata de recursos de técnica jurídica para amparar y proteger intereses, para defender bienes, propios del titular del derecho o de terceros. Estos bienes constituyen el *fin* de la protección; pero no se identifican con el *derecho subjetivo mismo*, que es el *medio* de realizar esa *protección*. Así es cómo en el Derecho de obligaciones, mediante *prestaciones*, que constituyen el *objeto*, siempre *pecuniario*, de los *derechos de crédito*, mediante *prestaciones siempre susceptibles de valor económico*, se satisfacen necesidades, se reparan perjuicios o se protegen valores, bienes o intereses del acreedor mismo o de terceros, que pueden ser de orden extraeconómico, espiritual o místico, totalmente ajenos al orden patrimonial.

Todo ello no es sino el corolario respecto de los derechos subjetivos de crédito, de las conclusiones a que arribamos ya en el precitado libro sobre “Las personas jurídicas”, en 1922. Vimos allí que Ihering sostenía una tesis equivocada al identificar o confundir la esencia del derecho con el interés protegido. Si los *derechos* fuesen *intereses protegidos*, solamente las personas físicas, únicas que tienen intereses propios y pueden aprovechar, gozar

¹ Pueden verse los fundamentos de ambos sistemas en el libro del autor: “*Las Personas Jurídicas*” (3ra. ed. 1922, pp. 132 y ss.).

o beneficiarse con esos derechos, serían sus *titulares* o *sujetos jurídicos*, verdaderos y reales; y habría que negar ese carácter a las fundaciones o establecimientos de utilidad pública, cuyos beneficiarios —los enfermos, los asilados o los huérfanos—, y no la entidad jurídica que los ampara, serían los titulares de los derechos. ¿Cómo hablar de provecho, goce o beneficio de un ente abstracto e ideal como son las corporaciones y las fundaciones? El ente moral no es un ser humano; no tiene deberes que cumplir, ni necesidades materiales o espirituales que satisfacer. Por eso Ihering llega a la conclusión falsa de que los titulares de los derechos no son las personas jurídicas, sino los individuos que las integran o reciben sus beneficios (los enfermos en un hospital, los huérfanos o ancianos en un asilo). Los beneficiarios o los miembros que tienen interés en la fundación o en la corporación serían los verdaderos titulares de los derechos. Pero tal situación no coincide con la realidad jurídica y legal. El único titular de los derechos en la fundación o corporación, el único propietario, acreedor o deudor, es el ente jurídico mismo; él es el que contrata por medio de sus representantes y el único que se obliga por los actos de sus mandatarios.

Los derechos no son, pues, *intereses* jurídicamente protegidos, sino *potestades ideales*, emanadas del ordenamiento jurídico, en favor de ciertos sujetos, correlativas de *deberes jurídicos*, impuestos a otros, y que acuerdan al titular la facultad de exigir una *prestación*: *potestades* que se dan *para proteger intereses humanos en la vida social*; pero que *en sí mismas no son intereses*. Basado en esa confusión, Ihering se opone a la idea, enteramente exacta, a nuestro juicio, de que el *objeto* de la obligación debe ser siempre de *valor pecuniario*, aunque los intereses que se protegen mediante ella puedan, como lo hemos visto, no serlo¹.

De toda esta controversia surge, como conclusión, que el *acreedor*, como sujeto activo del vínculo obligacional, debe tener un *interés*, directo o indirecto, en la prestación, pero que ese interés puede no ser de carácter *pecuniario*, sino puramente *moral*. En cambio, la *prestación* misma, que constituye el *objeto* de la obligación (el dar, el hacer o el no hacer), debe tener, y tiene siempre, un valor económico o pecuniario. Por otra parte, ésa es una de las diferencias, dentro de la clasificación de los derechos, que caracteriza a los derechos de crédito o personales en las relaciones civiles; y los distingue de los derechos personales en las relaciones de familia. El derecho puro de familia es sólo de valor moral, afectivo, extrapatrimonial. El derecho de crédito es siempre de valor pecuniario o económico y está dentro del patrimonio (ver art. 2312 del Código Civil y nota del doctor Vélez Sársfield).

Después de haber estudiado el aspecto doctrinario de la cuestión, veamos ahora las soluciones adoptadas por la ley argentina. Los comentadores

¹ En "*Las Personas Jurídicas*" (págs. 132, 178 a 180, 2a. Edic., 1922) están expuestos los fundamentos de las conclusiones aquí preconizadas y que fueron explicadas ya por el autor en sus cátedras de las Universidades de La Plata, desde 1921 y de Buenos Aires, desde 1924.

de nuestro Código han incurrido aquí en graves confusiones. Así, por ejemplo, en los textos corrientes de Salvat, Lafaille y Colmo, se sostiene que el Código adopta una *solución dualista*, admitiendo en algunos casos que la prestación no tenga valor económico, y exigiendo en otros el carácter pecuniario de la prestación. Dicen estos autores que para las *obligaciones contractuales* el artículo 1169 exige, como requisito esencial, el valor económico de la prestación, mientras que para las *obligaciones extracontractuales*, esto es cuando se trata de la responsabilidad por los actos ilícitos (*delitos o cuasidelitos*), hay disposiciones del Código que están abiertamente en contra de la anterior. Así, por ejemplo, se menciona el artículo 1068, que trata del *daño* causado por un acto ilícito y que puede referirse no sólo a los bienes o derechos patrimoniales, sino a cualquier clase de derechos o facultades de la persona. Dice ese artículo: "Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o *indirectamente* por el *mal hecho a su persona* o a sus *derechos o facultades*". Dentro de este concepto tan amplio, resulta que no solamente puede haber *perjuicios* en los bienes, sino que también puede haberlos en los derechos de cualquier orden, incluso en los derechos de la personalidad y de familia, que tienen un carácter puramente moral.

El concepto anterior es corroborado por el artículo 1075, en cuanto dispone que "*todo derecho* puede ser la materia de un delito, bien sea un *derecho sobre un objeto exterior* o bien se confunda con la *existencia de la persona*". Es decir, que no debe tratarse exclusivamente de un derecho de contenido económico o pecuniario, sino que el delito puede lesionar cualquier derecho, aunque sea de índole estrictamente moral. La nota del artículo 1075 agrega: "No puede negarse que el *honor* y la *reputación* de una persona puede ser la materia de un delito".

Por otra parte, el artículo 1078 establece en forma expresa el *resarcimiento* no sólo del *daño material*, sino también del *agravio moral*: "Si el hecho fuese un delito del derecho criminal, la obligación que de él nace no sólo comprende la *indemnización de pérdidas e intereses*, sino también del *agravio moral* que el delito hubiese hecho *sufrir* a la persona, *molestándole en su seguridad personal*, o en el *goce* de sus bienes, o hiriendo sus *afeciones legítimas*".

Todo esto es muy exacto. Pero resulta que la *obligación* "extracontractual" nacida del acto ilícito consiste en la *reparación* del *daño* producido por un delito o un cuasidelito, y se resuelve en una *indemnización pecuniaria*, ya sea que se trate de un daño material o de un agravio moral. El artículo 1083 así lo establece: "Toda *reparación del daño*, sea material o moral, causado por un delito, debe resolverse en una *indemnización pecuniaria*, que fijará el juez..."

La técnica *obligación* y su correlativo derecho de crédito de *fuentes extracontractuales*, proveniente de los actos ilícitos y que aquí nace, es la de

reparación o indemnización del daño causado. Esa reparación consiste en la *entrega de una suma de dinero*, y evidentemente no puede haber nada más económico ni pecuniario que el dinero, *objeto* de tales *obligaciones*.

Este sencillo análisis demuestra que no existe ningún dualismo ni contradicción entre las disposiciones que se refieren a las obligaciones nacidas de los delitos o cuasidelitos y las del artículo 1169 y siguientes. No hay ninguna antinomia en el sistema del Código, sino que los autores que creen ver esa dualidad confunden los conceptos de *deber jurídico* general y de *técnica obligación*. Del acto ilícito (*fuentes*) surge una *técnica obligación* de entregar una *suma de dinero*. El acto ilícito es la *violación* de un *deber jurídico*, esencialmente distinto de la *técnica obligación* de no hacer, como que no integra ese deber ningún derecho personal de crédito, de valor siempre pecuniario, *sino otras relaciones jurídicas*, como las de derecho real, también *pecuniario*, o bien de la *personalidad* o de familia, de valor puramente *moral*. Son los deberes jurídicos generales y negativos, correlativos y contrapuestos a esos otros derechos subjetivos, que no son de crédito o de obligación.

Existe un *deber jurídico general* —el *neeminen laedere*— de respetar y no dañar a las personas, tanto en su individualidad como en sus bienes y derechos. Ese *deber* integra, inseparable y esencialmente, otros derechos, no el de crédito. El deber de no dañar a otro en su persona física o moral, o en sus facultades, es *un elemento integrante y correlativo* de los *derechos de la personalidad* (nombre, honor, integridad corporal, vida, libertad). Constituye la “esencia” de esos derechos la *interdicción para todos los demás*, de atacar la persona, el nombre, la dignidad ajena. Éste es un *deber jurídico general*, no es una *técnica obligación*, porque con él no se sacrifica a nadie, en nada que sea lícito. En la *técnica obligación* de no hacer, hay una restricción, un sacrificio del deudor: él debe privarse o dejar de hacer algo que podía hacer, ha disminuido su libertad, sus derechos, sus bienes, ha sufrido un detrimento, un quebranto en su patrimonio, “una *privación especial* de realizar *actos lícitos*”. Y estos quebrantos inciden en el *balance económico* del deudor, porque constituyen un elemento de su *pasivo*. En cambio, nadie pondría en su pasivo el *neeminen laedere*, al que todos están obligados, porque nadie puede atacar el derecho de otro, ya se trate de un derecho real, de la personalidad o intelectual. Es la esfera jurídica de cada persona, en la cual no hay ninguna *obligación técnica*. Es el *deber jurídico general*, que integra la relación constituida por esa categoría de derechos denominados “absolutos”, en el sentido de que existen contra todos. No hay *obligaciones* que correspondan a *derechos reales*, como no los hay que correspondan a derechos de la personalidad, sino sólo a derechos creditorios. (art. 497, Código Civil y nota de Marcadé).

Nosotros no nos referimos a esos derechos de la personalidad, ni tampoco a los personales de familia, sino a los *derechos de crédito*, al establecer

que las *obligaciones* tienen necesariamente un *objeto pecuniario* o *económico*, porque sabido es que los derechos de la personalidad y los de familia, en principio, no tienen valor pecuniario y sólo excepcionalmente pueden dar origen a *otros derechos* de carácter patrimonial, cuando son atacados o violados por la comisión de *actos ilícitos*. Y esos *derechos patrimoniales* que de ellos nacen son, precisamente, los de *obligación* o de *crédito*, de valor siempre pecuniario. (Arts. 499 y 1083, Cód. Civ.).

Esta explicación es, como puede verse, sumamente clara y concuerda, evidentemente, con las normas del Código y con las observaciones de sus notas. A este respecto es conveniente recordar el concepto de *bien* y de *patrimonio* que establece el artículo 2312, y lo que expresa la nota a este artículo: “Hay *derechos* y los más importantes, que *no son bienes*: tales son ciertos derechos que tienen su origen en la existencia del individuo mismo a que pertenecen, como la *libertad*, el *honor*, el *cuerpo de la persona*, la *patria potestad*, etcétera. Sin duda, la *violación* de estos *derechos* personales (se refiere el codificador a los *derechos de la personalidad*), puede dar lugar a una *reparación* que constituya un *bien* jurídicamente hablando;...” Violado el derecho por el *acto ilícito*, surge la *obligación* de reparar (arts. 1077 y 1109), y la reparación consiste en una *cantidad de dinero* (art. 1083). Sigue diciendo la nota: “...pero en la acción nada hay de personal: es un *bien exterior* que se resuelve en un *crédito*. Si, pues, los derechos personales pueden venir a ser la *causa* o la *ocasión* de un *bien*, ellos *no constituyen* por sí mismos un *bien in jure*. Lo mismo se puede decir de las *facultades* del hombre, de su aptitud, de su inteligencia, de su trabajo. Bajo una relación *económica*, las facultades del hombre constituyen sin duda la riqueza; más *jurídicamente*, ellas no hacen parte de sus bienes. Así, el que hace cesión de sus bienes a sus acreedores, no comprende en la cesión, ni su libertad, ni sus facultades personales. El poder jurídico que se puede tener sobre una persona y los derechos que de él resulten, no son bienes, aunque las ventajas que obtenga, den nacimiento a bienes. En la jurisprudencia sólo se considera “bien” lo que puede servir al hombre, lo que puede emplear éste en satisfacer sus necesidades, lo que puede servir para sus usos o placeres, lo que puede en fin entrar en su patrimonio para aumentarlo o enriquecerlo, aunque consista en un mero derecho, como un *usufructo* o un *crédito*”.

En esta nota están perfectamente deslindados los conceptos. Los derechos de la personalidad y los de familia no son bienes, no entran en el patrimonio, no tienen valor económico. En cuanto esos derechos son violados, surge un *crédito*, una *obligación* de pagar *dinero*, es decir, una *obligación* estrictamente *pecuniaria* o patrimonial.

Aclaradas así las ideas, se advierte la confusión que se ha hecho en esta materia y el error fundamental en que se ha incurrido al sostener que el Código adopta *soluciones duales*. En el Código no hay ninguna dualidad. El *objeto* de la *obligación*, tanto en la derivada de un *contrato*, como de *cualquier otra fuente* —inclusive “un acto ilícito”—, es de *carácter pecu-*

niario (art. 1083). Por otra parte, la nota del art. 2312, del Código, agrega, que tanto los derechos personales de *obligación* como los derechos *reales* integran el *patrimonio*: “El *patrimonio* de una persona es la universalidad jurídica de sus derechos reales y personales, bajo la relación común de un *valor pecuniario*, es decir, como *bienes*”. Todo esto demuestra que en el Código no hay ninguna dualidad y que es terminante en el sentido de que *la prestación debe tener siempre un valor económico, pecuniario, patrimonial*, lo mismo en los derechos de crédito contractuales que en los extracontractuales.

Finalmente, de la lectura y el análisis detenido del trabajo de Ihering se deduce también la misma conclusión; esto es que si bien el *interés del acreedor* puede no ser *económico*, sino puramente moral o de cualquier otro orden; para *proteger* ese *interés* se acuerdan facultades o poderes jurídicos, constitutivos de los *derechos* llamados *de crédito* o *de obligación*, cuyo *objeto*, o *prestación*, es siempre *apreciable en dinero*. Todos los casos y ejemplos que enumera Ihering, y que se recogen en los textos corrientes, corroboran esta conclusión. En el ejemplo del mozo que conviene con el patrón en descansar el día domingo, Ihering se pregunta qué interés económico puede tener esa cláusula. Por el contrario, dice, el obrero ve mermados sus ingresos y aún puede incurrir en gastos extraordinarios. Claro está que el *interés* del mozo no es de carácter económico, pues con la cláusula relativa al descanso no busca acrecentar su patrimonio, sino procurarse la satisfacción de otras finalidades. Pero, del punto de vista del patrón, la disminución de los servicios prestados por el empleado constituye un detrimento *económico*, detrimento que se compensa con una retribución menor. La privación del servicio constituye, entonces, un *valor económico negativo* para el patrón, que se traduce en una menor retribución. En cambio, ese derecho al descanso tiene para el mozo un *valor económico positivo*, es un *bien económico*, puesto que satisface una *necesidad humana* (nota al art. 2312). Y tan cierto es ello, que tiene su *precio en dinero*, y el mozo lo *paga*, al cobrar un sueldo menor. La obligación tiene, pues, un contenido *patrimonial*, y la conclusión es análoga para todos los demás casos mencionados por Ihering.

En el ejemplo del locatario de una casa, con un jardín anexo, del que puede gozar por estipulación del contrato, el locador no puede privarlo de ese uso, cercando el jardín o construyendo en él. El uso o goce del jardín tiene también un *valor económico positivo* para el locatario, porque satisface una necesidad, porque el beneficiario recibe una ventaja o utilidad, aunque sea de mero placer, recreo o lujo, al igual que en el caso del *derecho real* de *servidumbre* (arts. 3000 y 3003) y aún de *usufructo* (arts. 2844 y 2845), ambos *patrimoniales*. Para el locador, la privación o restricción de su derecho sobre el jardín tiene en cambio un *valor económico negativo*, también *patrimonial*.

Corresponde estudiar ahora cuáles son las soluciones del *derecho comparado* en esta materia. El Código Napoleón no se refiere a la cuestión; son sus comentadores quienes se han ocupado de ella. El Código no exige que el

interés del acreedor sea siempre *pecuniario*, como lo hacía Pothier y algunos civilistas que lo siguieron en el siglo XIX; ni tampoco que la *prestación* siempre tenga valor económico, como lo establece nuestro Código en el artículo 1169, y lo hiciera ya el viejo Código de Sajonia (art. 662).

En cambio, cuando se preparó el Código alemán, bajo la influencia de Windscheid —que fue uno de los autores del primer proyecto— y de los trabajos de Ihering, se entendió que nada había que estatuir sobre la exigencia del valor pecuniario de la prestación. Así, se considera a la obligación como un vínculo en virtud del cual el acreedor tiene derecho de exigir del deudor una *prestación*, sin especificarse si ésta debe tener o no valor pecuniario. Y cuando se trata del *objeto* de los *contratos* no se establece ninguna regla, fuera de la que se refiere al objeto general de los *actos jurídicos*, como la que existe en nuestro artículo 953: todo lo que no sea ilícito, lo que sea posible, lo que no sea contrario a las buenas costumbres puede ser objeto de un acto jurídico; no es necesario, pues, que tenga valor pecuniario. No es que se diga expresamente que puede no tener valor pecuniario, ni que se deba proteger cualquier interés serio y legítimo del acreedor. No hay una solución expresa. Pero, deliberadamente, se excluye toda referencia a ese requisito, bajo la influencia de las doctrinas de Windscheid, de Ihering y de otros pandectistas que los siguieron.

El código suizo adopta análogo criterio que el alemán. No se pronuncia al respecto. El código japonés, sin embargo, influenciado por las críticas que hemos señalado, ha creído conveniente establecer que el *objeto* de la obligación puede tener un valor que no sea pecuniario, esto es, “ventajas no susceptibles de valuación en dinero”. El código del Brasil sigue al alemán y al suizo. Y la mayoría de los códigos de nuestro tiempo siguen también esta corriente.

Por el contrario, la tesis que sostenemos, y que venimos explicando desde hace muchos años, que ya estaba, en su esencia, en el estudio sobre la *naturaleza del derecho subjetivo* realizado en nuestro libro sobre “Las Personas Jurídicas” (1922), es la que ha prevalecido en la más reciente doctrina italiana, al punto de que cuando se trató de la reforma del Código Civil, aprobada en el año 1942, se llegó a una conclusión sobre este asunto, en el artículo 1174, que no es sino la consagración legal de aquella tesis: “La *prestación* que forma el *objeto* de la obligación —dice el citado artículo— debe ser *susceptible de valor económico*...”. Si no tiene valor económico, no es un derecho de crédito, no es una obligación; podrá ser un derecho de las relaciones de familia, de la personalidad o de otra categoría jurídica, pero no es *de crédito*. En el orden de los derechos de crédito, la *prestación* debe ser *de valor pecuniario*; el *objeto* es siempre de valor económico. Pero el artículo 1174 del código italiano tiene una segunda parte. Continúa diciendo: “...y debe corresponder a un interés, aunque no sea patrimonial del acreedor”. Quiere decir que el *interés*, el beneficio del *acreedor* es esen-

cial; pero puede ser de cualquier orden, puede no ser pecuniario o económico, como debe serlo, en cambio, la *prestación*.

Uno de los recientes comentarios del código italiano de 1942, dice que el artículo 1174 cumple dos importantes funciones: primero, "marca la línea de deslinde entre la obligación jurídica y algunas obligaciones que también dan vida a una acción judicial, pero que no tienen contenido patrimonial directo como son las obligaciones que nacen del derecho de familia". La primera función consiste, pues, en deslindar claramente las obligaciones y los derechos de crédito de los derechos puros de familia, para no caer en la pretendida asimilación de Demogue entre los deberes de familia y los de obligación. La segunda función del recordado precepto consiste en excluir de la categoría de las obligaciones jurídicas, los *deberes* que surgen y viven sólo en la esfera de la *vida moral y social*. (CODICE CIVILE art. 1174 Comentario de D'AMELIO FINZI).

En la última parte de su estudio, Ihering se ocupa, precisamente, de establecer la diferencia entre la técnica obligación y los compromisos y deberes de orden moral o social. Y a este respecto —según él— no basta establecer que haya un interés legítimo y serio del acreedor sino que de las circunstancias debe resultar que se ha contraído un compromiso *coercitivamente exigible*, de carácter *coactivo* —una verdadera *obligación jurídica*—, y que no se trata de una obligación que pertenece a la vida mundana o de sociedad, cuya violación tiene una sanción distinta. De las normas éticas, de las relativas a la convivencia social, a la cortesía, derivan compromisos y deberes, que pueden o no cumplirse y cuyo incumplimiento produce sanciones de caracteres diferentes. Si esos deberes estuviesen dotados de la nota jurídica de la *coacción*, perderían el carácter de espontaneidad y libertad que les es propio.

Como consecuencia de todo lo expuesto, resulta que en la obligación debe haber un interés jurídico, un interés legítimo y serio del acreedor, aunque no sea económico. No puede tratarse de un simple capricho, sino que debe proporcionar al acreedor una utilidad individual de cualquier orden y, en las más modernas tendencias, beneficiar también, directa o indirectamente, a la comunidad. La diferencia entre un *consejo* — como el del médico que le ordena al enfermo que se abstenga de fumar — y el *deber jurídico* que corresponde a una *técnica obligación*, reside, precisamente, en la *falta de ese interés* y de ese derecho en el primer caso.

La fórmula legal del código italiano resuelve, a nuestro entender, todas las controversias suscitadas en esta materia. Tal solución, por otra parte, no se opone ni a los textos ni al espíritu de nuestro Código, sino que, por el contrario, coincide substancialmente con él, según la interpretación aquí expuesta. Por ello, en los programas de estudio vigentes en la Facultad oficial, formulamos así esta cuestión: "*Intereses extrapatrimoniales y valor pecuniario de la prestación*".